



"Al servicio de la Justicia y de la paz social"

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D. E. de C., T. e I.¹, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001-31-03-009-1991 07131-01.
Proceso.	Divisorio.
Demandantes.	Norley de Jesús Zapata Builes y otros.
Demandados.	Luis Alfonso Zapata Correa y otros.
Procedencia.	Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
Decisión.	Confirma el auto apelado.
Temas.	El rechazo de plano de la oposición a la diligencia de entrega, supone que la presupuestos del remate estén satisfechos íntegramente, lo que sucede en este caso, debido a que el bien común estaba secuestrado en diligencia que resistió la persona de la cual deriva sus derecho la opositora.
Auto n°.	103-23

I. ASUNTO A RESOLVER.

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la señora Lina Alejandra Sánchez Restrepo, quien se opuso a la diligencia de entrega programada dentro del proceso divisorio de Norley de Jesús, Ana Felisa, Carlos José y Nubia del Socorro Zapata Builes frente a Luis Alfonso y Carlos José Zapata Correa, Bernardo Antonio, María Olga y María Teresa Zapata Zapata, Adolfo, Arturo, María del Carmen y María Margarita Rivera Zapata, Gloria María, Socorro, Miriam, Rocío, Oscar Orlando, Carlos Arturo y Hugo Alberto Zapata Rivera, Martías Gamarra de León, Elías Vélez Palacio y herederos indeterminados de los señores Julia Rosa Zapata de Calle, Ana de Jesús y Emilio Antonio Zapata Zapata, en donde actuó, como rematante, la señora Mónica María Lopera Rodríguez.

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. "La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."

II. ANTECEDENTES.

1.- En el proceso divisorio referido, se programó el remate del bien común, luego de lo cual se adjudicó la heredad a la señora Mónica María Lopera Rodríguez. A continuación, se comisionó para efectos de la diligencia de entrega, la cual se dispuso para el día 16 de junio de 2022, cuando la señora Lina Alejandra Sánchez Restrepo se opuso, dado que no fue vinculada al proceso, es poseedora del inmueble objeto de entrega, y está adelantando un proceso de pertenencia (ver folio 17, archivo de primera instancia, expediente electrónico).

2.- El Juzgado comisionado rechazó de plano la oposición, puesto que según el artículo 456 del Código General del Proceso el secuestre debe entregar el bien rematado y, si no lo hace, se le puede pedir al Juzgado de conocimiento que lo haga, en diligencia en la cual no se admiten oposiciones (ver igual folio).

3.- Inconforme, la opositora interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, fundamentada en que la norma procesal mencionada, cuando niega la posibilidad de oposición, se refiere a las personas que hubiesen actuado en el proceso, lo que resulta contrario a lo sucedido en este proceso, en donde ella no tuvo la oportunidad de conocer la actuación, incluyendo el remate; además, censuró que no se hubiera remitido la oposición al Juzgado de conocimiento, y señaló que el precepto citado alude a un bien secuestrado, diligencia que se practicó en este caso, pero teniendo como enterante a otras personas, incluidas sus tías, de donde deriva los derechos que pretende hacer valer fl. 17 ibídem).

4.- En el trámite de los recursos, se pronunció la señora rematante, para decir que frente a la opositora produce efectos la sentencia debido a que deriva su alegada posesión de sus tías, quienes, para la época del secuestro, era arrendatarias, de suerte que la sentencia produce efectos en contra de ella, todo lo cual es reafirmado por versiones testimoniales que trasuntó. Fuera de ello, argumentó que la juez comisionada tenía las mismas facultades de la comitente (fls. 18 y 19 del mismo cuaderno).

5.- La a quo no repuso su decisión, pero concedió la alzada en el efecto devolutivo.

III. CONSIDERACIONES.

1.- ANOTACIÓN PRELIMINAR. Antes de examinar de fondo el asunto que concita nuestra atención, se observa que las pautas relacionadas con la diligencia de entrega distinguen cuando es practicada por el juez de conocimiento y cuando la lleva a efecto un comisionado.

Precisamente, sobre ese punto, el canon 309, numerales 6, 7 y 8 disponen:

“6. Cuando la diligencia haya sido practicada por el juez de conocimiento y quien solicitó la entrega haya insistido, este y el opositor, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrán solicitar pruebas que se relacionen con la oposición. Vencido dicho término, el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas y resolverá lo que corresponda.

7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia.

8. Si se rechaza la oposición, la entrega se practicará sin atender ninguna otra oposición, haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario. Cuando la decisión sea favorable al opositor, se levantará el secuestro, a menos que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que decida la oposición o del que ordene obedecer lo resuelto por el superior, el demandante presente prueba de haber promovido contra dicho tercero el proceso a que hubiere lugar, en cuyo caso el secuestro continuará vigente hasta la terminación de dicho proceso. Copia de la diligencia de secuestro se remitirá al juez de aquel.”

De esta norma se desprende que, si hay oposición a la diligencia de entrega, la cual, *per se*, es viable, tanto así que el interesado insiste en la entrega, se da comienzo a un trámite especial, en el cual se pueden pedir pruebas y se realiza una audiencia de práctica y decisión.

En similar escenario, respecto del comisionado, la norma establece que el despacho comisorio se devuelve al comitente, en orden a que éste contabilice el término para pedir pruebas y programe la audiencia, es decir, si preliminarmente la oposición se estima factible, la devolución es perentoria para el inicio del trámite especial, pero si la oposición es improcedente desde el inicio, no hay motivo para devolverla y, en esa medida, el comisionado debe resolver rechazando la oposición.

Por consiguiente, como en este caso se desestimó la viabilidad de la oposición desde el principio, no se observa motivo para que se devolviera la comisión y, por lo tanto, claramente esa decisión la podía tomar el juez comisionado. De esta manera, no hay irregularidades en el trámite de la entrega que obstaculice la decisión que actualmente le compete al Tribunal.

2.- OPOSICIÓN A LA ENTREGA. / Legitimación. Es normal analizar la legitimación en la causa, como un presupuesto material de la decisión de fondo que deba emitirse en cada proceso, algo que igualmente debe hacerse en los trámites incidentales y en los especiales, consagrado en la normativa procesal. En ocasiones, el legislador establece una legitimación ordinaria, respecto de la cual basta la afirmación coincidente de titularidades entre la relación jurídica procesal y la relación jurídica sustancial, para que se encuentre legitimado el promotor; en otros casos, consagra una legitimación extraordinaria, la cual precisa de una prueba de la circunstancia habilitante para pretender o resistir válidamente.

La diligencia de entrega es por excelencia un caso que requiere una legitimación específica para poderse oponer. No de otro modo, se debe entender el precepto 309, numerales 1 y 2, del Código General del Proceso, cuando señalan:

“1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella.

2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurren a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias.”

Nótese que la oposición es válida si proviene de persona contra quien la sentencia no produce efectos, o sea, debe tratarse de un tercero absoluto en el proceso para que se pueda oponer, de suerte que, si se trata, por ejemplo, de un litisconsorte cuasi necesario, que no fue convocado ni intervino en el proceso, obviamente éste se encuentra cobijado por dicha decisión y, por ende, no se puede oponer.

Cosa similar ocurre respecto de los sujetos que se oponen a una diligencia de entrega, dado que, no deben ser litisconsortes cuasi necesarios, ni personas indeterminadas que se hubiesen emplazado, ni pueden derivar derechos, prerrogativas o hechos defendidos legalmente, de personas que acudieron al trámite; pues, en esa medida, la sentencia y demás decisiones de mérito, los involucran, al extremo de impedirle la oposición referida.

Lo dicho en precedencia, que corresponde a la regla general, se repite para los procesos divisorios por venta y, dicho sea de paso, en todos los que haya remate de bienes, en tanto que, respecto de la diligencia de entrega efectuada por el Juez, no se admiten oposiciones, como así lo establece el canon 456 del Código General del Proceso, todo lo cual obedece a que para proceder a la subasta de un bien, éste debe estar secuestrado y, en esa medida, las oposiciones deben gestarse frente al secuestro, de suerte que omitidas, no puede intentarse igual obstáculo respecto de la diligencia de entrega.

4.- CASO CONCRETO. En el evento actual adujo el despacho comisionado que no procedía la oposición, por cuanto la misma había sido proscriba por el creador legal en el artículo 456 del Código General del Proceso. La censora, por su parte, discute que nunca había intervenido en esta causa y que es poseedora del inmueble objeto de entrega, lo que la faculta para oponerse.

Un análisis preliminar de la cuestión pareciera otorgarles razón a los argumentos de la recurrente, dado que la señora Lina Alejandra Sánchez Restrepo no aparece mencionada en actuaciones precedentes a la diligencia de entrega, y aunque el referido artículo 456 niega la posibilidad de oposición a la diligencia de entrega, no es menos cierto que, si la persona opositora es tercero absoluto, debería aplicarse el numeral 2 del canon 309, que autoriza la oposición a personas frente a las cuales no produce efectos la sentencia, sin hace distinción alguna, esto es, involucrando también la sentencia aprobatoria del remate y de la división intelectual.

Empero, en este caso el remate y posterior orden de entrega si producía efectos frente a la opositora Lina Alejandra Sánchez Restrepo, dado que, como ella misma lo afirma en la demanda de pertenencia, *“desde el 01 de noviembre del año 1954, la señora Amanda Piza de Sánchez (tía del padre de ni poderdante) llegó a vivir como poseedora del primer piso del inmueble ubicado en la calle 59 número 48-55”* (fl. 35, cuaderno de primera instancia, expediente digital), o sea que, la

posesión que dice ejercer la opositora, más allá de una cadena de negocios que cita, se origina en la posesión otrora ejercida por la señora Piza de Sánchez o Piza Patiño.

Pues bien, la señora Piza de Sánchez fue señalada en la diligencia de secuestro como la arrendataria de ese inmueble, pagando \$20.000 en 1991 (fl. 14 ibídem). Pese a ello no se opuso al secuestro, ni parece haber intentado un incidente de levantamiento cautelar, lo cual significa que ella estuvo entrada de la diligencia y, se repite, como esa es la misma posesión que dice ejercer la señora Sánchez Restrepo, debe concluirse que los efectos del secuestro vinculan a la señora Piza de Sánchez o Piza Patiño, así como a la señora Lina Alejandra.

Siendo ello así, el secuestro produjo efectos en torno de la actual opositora, todo lo cual se puede predicar también en relación con el remate y, por consiguiente, en cuanto a la sentencia. De ahí que, la apariencia de tercero absoluto que dice tener la recurrente, se desvanezca imposibilitando la oposición generada.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL.

A tono con lo expresado en las consideraciones y aunque por otros motivos, se confirmará el auto apelado, sin necesidad de imponer costas en esta instancia, dado que no se causaron.

V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** el auto apelado, de fecha, procedencia y contenido ya indicados. **SIN COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado